

Voto anticrimen

José Luis Piñeyro

24 de junio de 2006

Entre la decepcionante contienda futbolera y la insípida campaña a la Presidencia, ha pasado inadvertido un hecho muy preocupante: el secuestro, tortura, asesinato y decapitación de tres policías y un civil por un comando armado de 100 sicarios que viajaban en 30 camionetas en Tijuana, Baja California.

Las explicaciones de las autoridades federales son las de siempre: son pleitos entre los cárteles del Golfo y el de Guzmán Loera; responden a los golpes propinados a las estructuras de corrupción federal, estatales y municipales infiltradas por los narcos; no se ha superado la capacidad de respuesta del Estado mexicano.

El candidato presidencial del Partido Acción Nacional, en gira por ese estado, se limitó a decir lo de siempre: "Seré un presidente que estará muy cerca con toda la fuerza de la ley y el peso federal, para combatir la delincuencia. No descansaremos hasta liberar a nuestras calles".

Por otra parte, con una perspectiva más amplia, María Elena Morera, presidenta de la organización no gubernamental México Unido contra la Delincuencia, señaló que en seguridad y justicia hay índices alarmantes de criminalidad, instituciones obsoletas con esquemas jurídicos y métodos ineficaces y carentes de un análisis objetivo de la situación delictiva nacional, con un mapeo por calle y colonia y los motivos que influyen en tal incidencia. Insistió en la necesidad de un gran acuerdo nacional que dignifique la policía y la unifique en metodología, logística y acción, así como discutir la conveniencia de una policía nacional o la depuración de las corporaciones municipales, estatales y federales, y reformar el sistema judicial penal y el sistema penitenciario en readaptación social.

Sin duda, estos y otros aspectos más deberán conformar una reforma integral del sistema policial, penitenciario y judicial, pero no serían suficientes si permanecen rodeados por un mar de desempleados y pobres creciente dada la ausencia de una política social y laboral estructural, o bien, si se insiste, por ejemplo, en que los problemas de corrupción e ineficiencia policiaca van a superarse con estímulos como el reciente aumento salarial de 8% retroactivo al 1 de mayo, de 2% al fondo de ahorro y mil pesos adicionales mensuales para cada uno de los 4 mil miembros de la policía estatal de Guerrero.

Esta medida, como forma de favorecer el reclutamiento o el mantenimiento del personal policiaco, tiene límites. Es decir, ningún Estado del mundo puede competir salarialmente con el narcotráfico en particular y el crimen organizado en general; existen límites presupuestales evidentes que no tiene la mafia profesional.

Se requieren estímulos morales y mayor capacitación para los policías y participación ciudadana amplia y permanente para combatir el crimen profesional, y no sólo mano dura como la prometida por los candidatos presidenciales del PAN y del Partido Revolucionario Institucional.

También es impostergable generar empleo masivo con salarios con capacidad de consumo digno y no de subsistencia, e igualmente combatir de forma integral la extendida pobreza y miseria en la que sobrevive más de la mitad de la población mexicana. Si esto no sucede con el próximo gobierno nacional, no se atacarán las raíces estructurales de donde se retroalimenta el crimen organizado y ocasional.

Éste no desaparecerá si se atacan estos dos frentes de debilidad y urgencia nacional, pero a no dudar sí disminuirá el índice delictivo de manera considerable.

Si a futuro sigue predominado la visión estatocéntrica frente a la delincuencia (el Estado es el único responsable de brindar seguridad pública sin ninguna participación social) y en la atención a la pobreza y el desempleo (el Estado sólo brinda el piso mínimo de educación, alimentación y salud para que después el trabajador compita en "igualdad" de condiciones en el mercado laboral y el empleo depende del "libre" juego de las leyes del mercado capitalista), no avanzaremos en la batida nacional al crimen organizado y al ocasional.

Como Andrés Manuel López Obrador es el único candidato presidencial que ha prometido respetar y estimular la democracia participativa y enfrentar los problemas de los minisalarios y de la concentración del ingreso, de la falta de empleo, de la pobreza y miseria y tendencialmente de la delincuencia, el voto por los candidatos del Partido de la Revolución Democrática no sólo es un voto útil para impulsar las reformas estructurales pendientes (fiscal, laboral, energética y educativa), sino también un voto antidelincuencia.

Profesor investigador de la UAM-A